

JURISPRUDÊNCIA E EMENTÁRIO

JURISPRUDENCE AND ABRIDGEMENT OF LAW

AMÉRICA DO SUL. ARGENTINA. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. Poder de policía sanitario. Decomiso. Mal de la vaca loca. Por aplicación de la Ley 3.959, de Policía Sanitaria Animal, el SENASA actúa legitimamente, en ejercicio del poder de policía sanitaria animal, si sacrifica y destruye animales riesgosos con el fin de evitar el ingreso al país del BSE o “mal de la vaca loca” (Del voto del juez Otero, cons. III). Gallegos Fedriani, Otero.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sala V

17.927/00

“Biogenetics Argentina S.A. c/ SENASA y Calidad Agroalimentaria Expte. 6.321/99 s/ Daños y Perjuicios”

Fecha: 27.9.04

SERVIÇO NACIONAL DE SANIDADE ANIMAL. Poder de polícia sanitário. Confisco. Mal da vaca louca. Por aplicação da Lei n. 3.959, de Polícia Sanitária Animal, o SENASA atua legitimamente, no exercício do poder de polícia sanitário animal, se sacrifica e destrói animais com risco com a finalidade de evitar o ingresso no país de BSE ou “mal da vaca louca” (O voto do juiz Otero, cons. III). Gallegos Fedriani, Otero.

Câmara Nacional de Apelações no Contencioso Administrativo Federal

Corte Suprema de Justiça da Nação

Sala V

17.927/00

“Biogenetics Argentina S/A. c/ SENASA e Calidad Agroalimentaria Expte. 6.321/99 s/ Danos e Prejuízos”.

Data: 27.9.04

CHILE. Recurso de protección — Acciones de salud — Recuperación y rehabilitación. Vistos y teniendo, además, presente: Que la recurrente de

protección planteó la posibilidad del traslado de su hijo a un centro asistencial de Santiago en busca de una evaluación y posible tratamiento, hecho que se concretó conforme se desprende de las medidas para mejor resolver dispuestas, en que el Secretario de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, don Edmundo Arturo Ramírez Álvarez expresó que el menor Miguel Ángel Barrientos Cárdenas fue trasladado al Hospital San Borja Arriarán en Santiago, centro hospitalario en el que efectivamente se encuentra internado en la sección pediatría, según certificó el 6 de diciembre de 2005, el relator de esta Corte Juan Cristóbal Mera Muñoz, atestado que se lee a fojas 303, además de lo cual el Director del Hospital Clínico San Borja Arriarán informó que Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, Rut n. 21.838.657-1, registra n. de Ficha Clínica n. 966220, con una atención en Policlínico de Cardiología Infantil, el día 23 de noviembre de 2005, condiciones en las cuales se satisfizo lo solicitado mediante el recurso de lo principal de fojas 11. De conformidad a lo expuesto, se confirma la sentencia apelada, de tres de noviembre de dos mil cinco, escrita de fojas 287 a 295. Acordada con el voto en contra del ministro señor Muñoz, quien estuvo por revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección interpuesto por Patricia Candelaria Cárdenas Alvarado, en favor de su hijo Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, y disponer que el Estado de Chile, específicamente el Servicio de Salud de Coyhaique y Santiago, según corresponda al lugar en que se encuentre el menor, deben desarrollar todas las acciones de salud destinadas a preservar su vida, disponiendo el traslado a los centros de salud especializados, en Chile o el extranjero, para lo cual tiene en consideración los siguientes fundamentos: 1º — Que son hechos del recurso que Miguel Ángel Barrientos Cárdenas nació el 17 de mayo de 2005 en el Hospital de Coyhaique, afectándole una enfermedad congénita que le ha producido graves malformaciones, cuyo diagnóstico es poco alentador a su respecto conforme lo expresan los facultativos que lo han atendido hasta ahora, estimándose por el equipo médico ética y científicamente inadecuado iniciar un tratamiento de corrección de su estructura corporal, pues con ello se afrontaría solamente su aspecto físico, que no contribuye a sanar la enfermedad diagnosticada, acción que está fuera de las posibilidades científicas, sin perjuicio de lo cual se ha dado, incluso más allá de los plazos reglamentarios, la atención que era posible brindarle, expresando que la vida del menor se ha extendido más allá de todo caso de igual diagnóstico. 2º — Que la madre recurrente solicita se le otorgue a su hijo la atención especializada que corresponda, pero que no está en situación de precisar por falta de conocimientos médicos, la que pide esté destinada a mantener con vida a su hijo. 3º — Que persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, cuya existencia se inicia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre, según lo expresa el legislador en los artículos 25, 55 y 74 del Código Civil, oportunidad desde la cual la Constitución Política de la República asegura su derecho a la vida, como a elegir el sistema de salud estatal o privado, precisamente para garantizar las acciones de salud, entre

ellas las de recuperación y de rehabilitación de las enfermedades que afecten al individuo, conforme se expresa en el inciso primero del número 1 y en el inciso final del número 9 del artículo 19. 4º — Que el Código Político ha expresado las bases del sistema democrático, asegurando un conjunto de derechos sociales, que la doctrina califica como aquellos básicos de solidaridad social, los que las leyes se han encargado incluso de desarrollar en algunos aspectos, instaurando lo que se conoce actualmente como un Estado Social de Derecho, en que el Estado asume principal o subsidiariamente ciertas obligaciones y deberes para con las personas, principalmente las que dicen relación con su subsistencia, proclamándose incluso que en el aspecto económico se ha adoptado una política social de mercado, todo lo cual redundará en una necesaria solidaridad con quienes han tenido menores posibilidades de desarrollo. Estas ideas han sido reforzadas expresando que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, asegurando que incluso los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio (inciso segundo del artículo 5º y n. 26 del artículo 19). Asentando con mayor fuerza estas ideas, en lo que se refiere a otorgarle la calidad de derecho absoluto a la vida, el constituyente ha dispuesto que la pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado, de lo que se sigue que en ningún otro caso podrá constitucional, legal y legítimamente, una persona o autoridad, dentro del Estado de Chile, decidir la muerte de una persona, sea por acción u omisión, todo lo contrario es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, pudiendo generar las responsabilidades pertinentes la omisión de auxilio o socorro en el caso que una persona lo requiera para preservar la vida. 5º — Que resulta adecuado recordar que nuestro legislador desestimó la teoría de la viabilidad al regular el inicio de la existencia de las personas, innovando respecto de la tradición española en este aspecto, con lo cual es posible descartar toda posibilidad de oportunidad o conveniencia en la adopción de las acciones de salud destinadas a preservar la vida de una persona, aún cuando estén respaldadas en aspectos estadísticos médicos o en fundamentos éticos, por cuanto el conocimiento que nos entrega la ciencia, en ocasiones constituye en relativos algunos juicios absolutos y por su parte la filosofía moderna hace relativos algunos principios éticos absolutos, variación y cambio que imponen ser cautelosos ante juicios que no es posible comprobar indubitadamente. Respecto de la naturaleza y contenido de la vida es posible efectuar los más diversos planteamientos, de acuerdo a las distintas concepciones filosóficas, políticas, científicas o religiosas, sin embargo, estimar que las personas y autoridades están habilitadas para decidir sobre quienes son merecedores de las acciones que pueda desarrollar el Estado para preservarla o en quienes

se justifica investir para mantenerlos con vida, es una facultad o competencia que el ordenamiento jurídico no ha radicado en ninguna autoridad. Es más, el hecho de la existencia es un misterio que no tiene una sola justificación, de modo que en concepto de este disidente toda vida merece ser protegida, sin que concurren razones para no hacerlo respecto de Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, en que incluso no existe colisión con otro derecho de igual relevancia. 6º — Que al elegir el sistema estatal de salud, el imponente responsable legal y económico del menor cuya protección se solicita, ha radicado en este sistema la obligación de satisfacer los gastos económicos que impliquen las acciones de salud que se puedan llevar adelante a su respecto, sin perjuicio de la contribución que sea procedente exigir al cotizante. 7º — Que por tales motivaciones, en concepto del disidente, no obstante el posible precario estado de salud de Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, corresponde acoger el recurso de protección, imponiendo al Servicio de Salud desarrollar todas las acciones de salud destinadas a la recuperación y rehabilitación del mencionado menor, por cuanto la negativa de la autoridad importa una conducta arbitraria e ilegal, según se ha tenido ocasión de expresarlo en las consideraciones precedentes. Acciones de salud que deberá llevar adelante el Servicio de Salud de Coyhaique o Santiago, según donde se encuentre el menor, como además en el extranjero si fuere ello adecuado, desarrollando todos los procedimientos de salud destinado a buscar la preservación de la vida de Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, sin que puedan entenderse concluidos por el hecho de haber satisfecho los procedimientos propuestos por la recurrente, dado que no le corresponde dirigir estas acciones pues, según ella mismo lo señala, carece de los conocimientos científicos pertinentes, obligación que el ordenamiento jurídico radica en quien los posee y está en condiciones de concretarlos. Redacción del Ministro señor Muñoz. Regístrese y devuélvase con su agregado.

Corte Suprema

Primera Sala

Rol n. 5910-05.

Fecha: 26.1.06

Recurso de proteção — Ações de saúde — Recuperação e reabilitação.

Vistos e tendo, também, presente: Que a recorrente de proteção pleiteou a possibilidade da transferência de seu filho para o centro de ajuda de Santiago em busca de uma avaliação e possível tratamento, fato que se concretizou conforme se depreende medidas para melhor resolver dispostas, em que o Ministro do Tribunal de Apelações de Coyhaique, dom Edmundo Arturo Ramírez Alvarez expressou que o menor Miguel Ángel Barrientos Cárdenas foi transferido Hospital San Borja Arriarán em Santiago, centro hospitalar no qual realmente se encontra internado na seção de pediatria, como certificou em 06 de dezembro de 2005, o relator desta Corte Juan Mere Cristóbal Muñoz, atestado que se lê nas folhas 303, além do que o Diretor do Hospital

Clínico San Borja Arriarán informou que Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, Rut n. 21.838.657-1, registrado sob o n. de Ficha Clínica n. 966220, em cuidados de um Policlínico de Cardiologia Infantil, no dia 23 de novembro de 2005, condição com a qual se satisfaz o requerido por meio do recurso do principal de folhas 11. Em conformidade ao exposto, se confirma a sentença apelada, de 03 de novembro de 2005, nas folhas 287 às 295. Acordada, com o voto contra do ministro Senhor Muñoz, que entendeu revogar a sentença apelada e acolher o recurso de proteção interposto por Patricia Candelária Cárdenas Alvarado, em favor do seu filho Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, e determinar que o Estado de Chile, especificamente o Serviço de Saúde de Coyhaique e Santiago, conforme o lugar onde o menor se encontrar, devem prestar todas as ações de saúde dedicadas a preservar a vida dele, preparando a transferência aos centros especializados de saúde, no Chile ou no estrangeiro, para o que tem em consideração os fundamentos seguintes: 1º — Que são fatos do recurso que Miguel Ángel Barrientos Cárdenas nasceu em 17 de maio de 2005 no Hospital de Coyhaique, com uma doença congênita que lhe produziu graves malformações, cujo diagnóstico é de pouca perspectiva, conforme expressam os médicos que até agora o atenderam, sendo considerado pela equipe médica ética e cientificamente inadequado começar um tratamento de correção de sua estrutura corporal, porque com isto tratar-se-ia só seu aspecto físico, o que não contribuiria para curar a doença diagnosticada, uma ação que está fora das possibilidades científicas, sem prejuízo do que lhe foi prestado, até mesmo além das condições regulamentares, a atenção que era possível lhe oferecer, resultando que a vida do menor se alongou além de todos os casos de diagnóstico igual. 2º — Que a mãe recorrente requer que seja concedida ao seu filho a atenção especializada devida, mas que não está em situação de especificar por falta de conhecimento médico, o necessário para manter seu filho com vida. 3º — Que pessoa é todo o indivíduo da espécie humana, qualquer que seja idade dele, sexo, raça ou condição, cuja existência se inicia ao nascer, isto é, ao separar-se completamente de sua mãe, segundo expressa o legislador nos artigos 25, 55 e 74 do Código Civil, oportunidade na qual a Constituição Política da República assegura seu direito à vida, elegendo o sistema de saúde estatal ou privado, com a finalidade de garantir as ações de saúde, entre elas, estas de recuperação e de reabilitação das doenças que afetam o indivíduo, conforme expressado no inciso primeiro do número 1 e no inciso final do número 9 do art. 19. 4º — Que o Código Político expressou as bases do sistema democrático, assegurando um grupo de direitos sociais que a doutrina qualifica como aqueles básicos de solidariedade social, aos quais também as leis se encarregaram de desenvolver em alguns aspectos, estabelecendo o que é conhecido no momento como um Estado Social de Direito, em que o Estado assume principal ou subsidiariamente certas obrigações e deveres para com as pessoas, principalmente as que dizem respeito à sua subsistência, proclamando-se, inclusive, que no aspecto econômico foi adotada uma política social de mercado, tudo redundando em uma so-

lidariedade necessária com os que tiveram menos oportunidades de se desenvolver. Estas idéias foram reforçadas expressando que o exercício da soberania reconhece como limitação o respeito aos direitos essenciais que emanam da natureza humana, assegurando inclusive que os preceitos legais, que por mandamento da Constituição completam as garantias por ela estabelecidas ou as limitem nos casos em que ela autoriza, não poderão afetar os direitos em sua essência, nem impor condições, tributos ou requisitos que impeçam seu livre exercício (inciso segundo do art. 5º e n. 26 do art. 19). Assentando com maior força estas idéias, no que se refere a outorgar a qualidade de direito absoluto à vida, o constituinte dispôs que a pena de morte só poderá ser estabelecida para crime contemplado em lei aprovada com quórum qualificado, do que se segue que em nenhum outro caso poderá constitucional, legal e legitimamente, uma pessoa ou autoridade, dentro do Estado de Chile, decidir a morte de uma pessoa, seja por ação ou omissão, bem ao contrário, é dever dos órgãos do Estado respeitar e promover tais direitos essenciais que emanam da natureza humana, podendo gerar as responsabilidades pertinentes à omissão de auxílio no caso em que uma pessoa o requeira para preservar a vida. 5º — Que é apropriado lembrar que nosso legislador desconsiderou a teoria da viabilidade ao regular o início da existência das pessoas, renovando em relação à tradição espanhola neste aspecto, com o que é possível descartar todo juízo de oportunidade ou conveniência na adoção das ações de saúde destinadas a preservar a vida de uma pessoa, ainda quando respaldados em aspectos estatísticos médicos ou em fundamentos éticos, porque o conhecimento que nos dá a ciência, em ocasiões torna relativos juízos absolutos e por sua parte a filosofia moderna torna relativos alguns princípios éticos absolutos, variação e mudança que impõem cautela ante juízos absolutos que não é possível comprovar indubitavelmente. Quanto à natureza e conteúdo da vida é possível ter as posições mais diversas, de acordo com as diferentes concepções filosóficas, políticas, científicas ou religiosas; porém, estimar que as pessoas e autoridades estão habilitadas para decidir quem é merecedor das ações que o Estado pode desenvolver para preservá-la ou em quem se justifica investir para mantê-lo com vida, é uma habilidade ou competência que o ordenamento jurídico não destinou a qualquer autoridade. Além disso, o fato da existência é um mistério que não tem uma única justificação, assim no conceito deste dissidente toda a vida merece ser protegida, sem que concorram razões para não o fazer a Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, onde inclusive não existe colisão com outro direito de igual relevância. 6º — Que ao escolher o sistema estatal de saúde, o responsável legal e econômico do menor cuja proteção é requerida, firmou neste sistema a obrigação de satisfazer os gastos econômicos que gerem as ações de saúde que se façam necessárias no futuro, sem prejuízo da contribuição que seja razoável exigir do segurado. 7º — Que para tais motivos, no conceito deste dissidente, não obstante o possível estado precário de saúde de Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, deve-se acolher o recurso de proteção, impondo ao Serviço de Saúde de-

envolver todas as ações de saúde destinadas à recuperação e reabilitação do mencionado menor, uma vez que a negativa da autoridade importa um comportamento arbitrário e ilegal, como se teve oportunidade de expressar nas considerações precedentes. Ações de saúde que deverão levar adiante o Serviço de Saúde de Coyhaique ou Santiago, de acordo com onde se encontre o menor, como também no estrangeiro se for isto adequado, desenvolvendo todos os procedimentos de saúde destinados à preservação da vida de Miguel Ángel Barrientos Cárdenas, sem que se possam entender concluídas pelo fato de ter satisfeito os procedimentos requeridos pela recorrente, dado que não lhe corresponde dirigir tais ações, pois, de acordo com ela mesma, falta-lhe o conhecimento científico pertinente, obrigação que o ordenamento jurídico fixa para quem o possui e está em condições de os concretizar. Redação do Ministro Señor Muñoz. Registre-se e o devolva com o seu apenso.

Corte Suprema

Primeira Sala

Decisão: n. 5910-05.

Data: 26.1.06

COLÔMBIA — DERECHO A LA SALUD — SUMINISTRO DE AUDIFONOS / DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL — SUMINISTRO DE AUDIFONOS / PROTESIS AUDITIVA. No cabe duda que las prótesis auditivas no pueden reemplazarse con algún otro tratamiento o medicamento que sí esté contemplado en el plan obligatorio de salud, y no por su eventual o real alto costo se justifica su exclusión del pos, dado que compromete de modo sustancial el derecho a la salud en conexidad inescindible con el derecho fundamental a la vida en condición de dignidad humana. En el presente asunto, si bien la actora guardó silencio respecto de su capacidad económica para sufragar el valor del tratamiento que necesita para no perder su audición, es de suponer que si recurrió ante esta jurisdicción para ejercer el mecanismo preferente y sumario de la acción de tutela, es en razón a que no posee los medios económicos para cubrir el alto costo de los audífonos requeridos en forma urgente, más aun si se tiene en cuenta que, la parte demandada no desvirtuó tal actuación. En estas condiciones, la sala tutelar los derechos a la seguridad social y a la salud en conexidad con el derecho fundamental a la vida de la actora y, ordenará para el efecto que Cafesalud E.P.S. suministre las prótesis auditivas o audífonos prescritas por el médico tratante, en consideración a que dicha entidad de previsión social en salud es a la que se encuentra afiliada la actora, por lo que la obligación en cuestión le asiste a aquella y no al ministerio de la protección social.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sección Primera — Subsección “B”

Expediente: n. 25000-23-15-000-2005-00013

Magistrado Ponente: Fredy Ibarra Martínez

Fecha: 25.1.05

DIREITO À SAÚDE — FORNECIMENTO DE APARELHO PARA SURDEZ/ DIREITO AO SEGURO SOCIAL — FORNECIMENTO DE APARELHO PARA SURDEZ/ PRÓTESE AUDITIVA. Não resta dúvida que as próteses auditivas não podem ser substituídas por algum outro tratamento ou medicamento que esteja contemplado no plano obrigatório de saúde, e seu eventual ou real alto custo não justifica a sua exclusão do plano, visto que compromete de modo substancial o direito à saúde, ligado inseparavelmente ao direito fundamental à vida em condição de dignidade humana. Na presente matéria, ainda que a autora silenciase sua capacidade econômica para sufragar o valor do tratamento de que necessita para não perder a audição, supõe-se que se recorreu a esta jurisdição para exercer o mecanismo preferente e sumário de ação de tutela, foi em razão de não possuir os meios econômicos para cobrir o alto custo dos aparelhos de surdez requeridos de maneira urgente, ainda mais se se considera que a parte demandada não contestou tal autuação. Nessas condições, o tribunal tutelar os direitos à segurança social e à saúde ligados ao direito fundamental à vida da autora e para isso ordenará que Cafesalud E.P.S forneça as próteses auditivas, ou aparelho para surdez, prescritos pelo médico, considerando que tal entidade de previsão social em saúde é aquela à qual a demandante se encontra filiada, porque a obrigação em questão assiste àquela e não ao Ministério da Proteção Social.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Órgão Julgador: Seção Primeira — Subseção “B”

Decisão: 25000-23-15-000-2005-00013

Relator: Fredy Ibarra Martínez

Data: 25.1.05

DERECHO A LA SALUD — PROTECCIÓN POR CONEXIDAD / SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO — OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL / LIBRETA MILITAR — EXPEDICIÓN SIN HABER COMPLETADO EL TIEMPO POR ENFERMEDAD. AÇÃO DE TUTELA. Según lo preceptuado en el inciso 3º del artículo 13 de la constitución nacional “*es obligación del estado proteger a aquellas personas que por su condición económica, física y mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta ...*”. Circunstancias en las que actualmente se encuentra el demandante, como consecuencia del trastorno depresivo mayor, que adquirió mientras prestaba el servicio militar obligatorio. La Ley 48 de 1993 “*por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización*”, artículo 39 establece que una vez finalizada la prestación del servicio militar, concluyen las obligaciones en materia de seguridad social para los que entran a formar parte de la reserva de las fuerzas militares en virtud de su desvinculación total. **En el presente caso dicha regla presenta una excepción en su aplicación, en razón al peligro que se cierne sobre los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del señor Nelson Peña Pérez, y a las circunstancias de debilidad manifiesta en que**

éste se encuentra, condiciones que el juez de tutela no puede pasar por alto. En este orden de ideas, la Sala en aplicación a las disposiciones constitucionales mencionadas y a la jurisprudencia transcrita, considera procedente proteger los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, invocados en la acción de tutela instaurada por el señor Nelson Roberto Peña Pérez, ordenando que se le suministre el tratamiento médico psiquiátrico urgente que su enfermedad requiera en el momento, ya que la orden de un tratamiento de otra naturaleza, es propio de una acción ordinaria. En lo que respecta a los derechos a la igualdad, al trabajo, a la educación y al debido proceso, no aparece acreditada dentro del expediente prueba alguna que permita a la sala efectuar su análisis, por lo que la pretensión en relación con estos derechos, será denegada. Respecto de la solicitud de expedición de la libreta militar en forma gratuita, por parte del distrito militar n. dos, en atención a que el demandante prestó su servicio militar durante ocho (8) meses y cuatro (4) días, es decir más de la mitad de la totalidad del tiempo legalmente establecido (12) meses, el demandante tiene derecho a la expedición de su libreta militar sin costo alguno, de conformidad con lo establecido en la directiva n. 0064 de 1995. Situación que fue reconocida por el director de reclutamiento y control reservas del ejército, en su escrito visible a folios 38 y 39 del expediente. En consecuencia se ordenará a esta entidad, que expida al demandante su respectiva libreta militar.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sección Primera — Subsección “B”

Expediente n.: 2005-0003

Magistrada Ponente: Ayda Vides Paba

Fecha: 27.1.05

DIREITO À SAÚDE — PROTEÇÃO POR CONEXIDADE/SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO — OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA SOCIAL/MILITAR — EXPEDIÇÃO SEM TER COMPLETADO O TEMPO POR DOENÇA. AÇÃO DE TUTELA. Segundo o preceituado no inciso 3º do art. 13 da constituição nacional “é obrigação do Estado proteger aquelas pessoas que por suas condições econômicas, físicas e mentais, encontram-se em circunstâncias de debilidade manifesta ...”. Circunstâncias, nas quais atualmente se encontra o demandante, como conseqüência do transtorno depressivo maior, que adquiriu enquanto estava no serviço militar obrigatório. A Lei n. 48 de 1993 “pela qual se regulamenta o serviço de recrutamento e mobilização”, art. 39 estabeleceu que uma vez finalizada a prestação do serviço militar, concluem-se as obrigações em matéria de segurança social para os que entram na reserva das forças militares em virtude de sua desvinculação total. No presente caso, a referida regra apresenta uma exceção em sua aplicação, em razão do perigo que se instaura sobre os direitos fundamentais à saúde e à vida digna do senhor Nelson Pena Pérez, e das circunstâncias de debilidade manifesta,

nas quais ele se encontra; condições que o juiz de tutela não pode ignorar. Nessa ordem de idéias, o tribunal, em aplicação das disposições constitucionais mencionadas e da jurisprudência transcrita, considera procedente proteger os direitos fundamentais à saúde ligados à vida, invocados na ação de tutela instaurada pelo senhor Nelson Roberto Pena Pérez, ordenando que se lhe forneça o tratamento médico psiquiátrico urgente que a sua doença requer no momento, já que a ordem de um tratamento de outra natureza é própria de uma ação ordinária. No que respeita aos direitos de igualdade, trabalho, educação e devido processo, não restou demonstrada no expediente alguma evidência que permita ao tribunal efetuar a sua análise, razão pela qual a pretensão em relação a esses direitos será denegada. A respeito da solicitação da expedição gratuita da carteira militar, por parte do distrito militar n. dois, considerando que o demandante prestou o seu serviço militar durante oito (8) meses e quatro (4) dias, diga-se mais da metade da totalidade do tempo legalmente estabelecido (12) meses, o demandante tem o direito à expedição da sua carteira militar sem qualquer custo, conforme estabelecido na diretiva n. 0064 de 1995. Esta situação foi reconhecida pelo diretor de recrutamento e controle de reservas do exército, no seu texto visível nas folhas 38 e 39 do expediente. Em conseqüência se ordenará a esta entidade que expeça ao demandante a sua respectiva carteira militar.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Órgão Julgador: Primeira Seção — Subseção “B”

Decisão: N.: 2005-0003

Relatora: Ayda Vides Paba

Data: 27.1.2005

BRASIL. DIREITO PENAL SANITÁRIO. HABEAS CORPUS. FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE PRODUTOS FABRICADOS PARA CONSUMO EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES E SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cuida-se de *habeas corpus*, impetrado em favor de Eugênio Schuch Júnior e Milton Fernandes Sesti Neves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que proveu recurso especial interposto pelo Ministério Público. Acórdão que foi assim ementado: “CRIMINAL. RESP. FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE PRODUTOS FABRICADOS PARA CONSUMO EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES E SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DA MERCADORIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO. O tipo do inciso IX do art. 7º, da Lei n. 8.137/80 trata de crime formal, bastando, para sua concretização, que se coloque em risco a saúde de eventual consumidor da mercadoria. Cuidando-se de crime de perigo abstrato, desnecessária se faz a constatação, via laudo pericial, da impropriedade do produto para consu-

mo. Precedentes. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, quanto à condenação pelo crime contra as relações de consumo.” 2. O acórdão impugnado transitou em julgado em 14 de junho de 2004, como se vê das fls. 414 do apenso n. 02. 3. Sustenta-se neste *writ*, em suma, a ilegalidade da condenação dos pacientes. Dois os motivos de tal alegação. O primeiro diz respeito à prova produzida na instrução criminal. Isso porque, segundo o impetrante, a condenação pela prática do delito inserto no inciso IX do art. 7º da Lei n. 8.137/90 exige a comprovação de que os produtos de interesse da saúde sejam, de fato, impróprios para o consumo. O que, em seu juízo, só é possível com a verificação pericial, ausente, também segundo o impetrante, no caso em análise. A segunda ilegalidade que se alega res-sair da inicial é referente às penas aplicadas aos impetrantes. Sustenta-se que a severidade das penas restritivas, no caso, estaria a igualá-las às penas privativas de liberdade, suprimindo-se, assim, o conteúdo educativo da lei. Por fim, o impetrante argumenta que a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito não foi devidamente fundamentada pelo julgador, indo de encontro, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 4. Daí o pedido de medida liminar, formulado sob o argumento de que “O *fumus boni iures* foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação e a incidência do *periculum in mora* reside no fato do grave prejuízo moral e psicológico que sofrerão os pacientes, primários, empresários, com bons antecedentes e endereço fixo, cumpridores de seus deveres sendo, portanto, injustificada a condenação dos pacientes e, especialmente por terem se comportado dentro dos ditames legais, conforme já exposto, além da execução da pena estar por iniciar-se, ante a inexistência de efeito suspensivo.” (*sic*, fls. 13) 5. Pois bem, não obstante a fundamentação do impetrante, não tenho como afastar, neste juízo deliberatório em que se mesclam num mesmo tom a brevidade e a carência de fundamento analítico, as premissas em que se louvou o ato judicial atacado. Acresce que, da leitura da inicial, não se extraem elementos capazes de atestar, de plano, a ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão da cautelar pleiteada. Razão pela qual indefiro a cautelar reque-stada. Isso, é claro, sem prejuízo de reexame da matéria, quando do julgamento do mérito do pedido.

Supremo Tribunal Federal

HC n. 90779 / PR — PARANÁ

Relator: Ministro Carlos Britto

Data: 15.3.07

DIREITO PÚBLICO SANITÁRIO. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE CONSTITUEM AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA — PSF E O PACS — PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. LIMINAR DEFERIDA. Relatório 1. Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapirapuã-GO, em 5 março de 2007, com fundamento no art. 102, inc. I, alínea I, da Constituição da República, nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e nos arts. 13 e seguintes da Lei n. 8.038/90, contra decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho da Cidade de Goiás-GO (Ação Civil Pública n. 00309-2007-221-18-00-6). (...) Em 2 de março de 2007, a Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho da Cidade de Goiás-GO proferiu a seguinte decisão: "(...) resolvo determinar ao Requerido MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ (GO), na pessoa do Senhor Prefeito Zacarias Ribeiro Oliveira, que, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida neste feito, se abstenha de contratar novos trabalhadores sem prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos V e IX do art. 37 da [Constituição da República] sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais)(...) Inclua-se o feito em pauta para audiência, que designo para o dia 29.03.2007 às 11h10min" (fl. 54). O objeto da presente reclamação é essa decisão. 4. O que o Reclamante põe em foco é a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar esta lide, fundamentando-se na decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 5. Sustenta que não seria possível fixar a competência daquela Justiça Especializada, "com base no art. 114, I, da [Constituição da República], pois o Requerido/Reclamante é um ente público municipal para o qual está suspensa a eficácia do texto constitucional invocado" (fl. 10). Acrescenta que a autoridade judiciária reclamada, ao permitir o processamento da Ação Civil Pública na qual é discutido "unicamente o regime de contratação dos médicos e demais profissionais de saúde contratados pelo Município de Itapirapuã" (fl. 13), estaria a descumprir a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. Assevera que as contratações realizadas visam à formação de "equipes médicas que atendem ao Programa Saúde da Família" (fl. 24) e que os contratos vencem em 31.12.2007, razão pela qual entende que, ao impedir o Município de realizar novos contratos, a decisão reclamada põe em risco a saúde pública local. Requer, por isso, o deferimento de medida liminar para suspender "o andamento [da Ação Civil Pública] n. 0309-2007-221-18-00-3, em trâmite perante a Vara do Trabalho da Cidade de Goiás, bem como seja suspensa a eficácia da decisão nela proferida, até o julgamento final da presente Reclamação (art. 158 do RISTF e art. 14, II, da Lei n. 8.038/90)" (fl. 25 — grifos no original). E, no mérito, pede a confirmação da liminar para que se ratifique "a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação Civil Pública, em desfavor do Reclamante" (fl. 26 — grifos no original). 6. Em 5 de março de 2007, vieram-me conclusos os autos. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 7. Ao distribuir a presente Reclamação, a Coordenadoria de Processamento Inicial deste Supremo Tribunal Federal consignou que "a petição inicial da

presente Reclamação não foi assinada, estando assinada, entretanto, a petição que serve de contrafé” (fl. 56). 8. Embora não constem assinaturas dos representantes legais do Reclamante no anverso da petição inicial, tem-se que, no verso de todas as suas páginas, consta a rubrica de Felicíssimo Sena, advogado subscritor da contrafé, acompanhada de autenticação do 6º Tabelionato de Notas de Goiânia-GO. Essa circunstância e o fato de estar a contrafé devidamente assinada suprem o requisito essencial para o conhecimento desta ação, razão pela qual passo a analisar o pedido de medida liminar apresentado. 9. A questão posta nos autos não é estranha a este Supremo Tribunal Federal. Em situações análogas à presente, a medida liminar pleiteada pelo Reclamante tem sido deferida, sendo exemplo: Rcl 4.872-MC/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ 2.2.2007; Rcl 4.074-MC/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 10.2.2006; e Rcl 4.466-MC/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 1º.8.2006. 10. Em 5 de abril de 2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-DF, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou cautelar deferida pelo Relator Ministro Cezar Peluso, nos termos do seu voto assim proferido: “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, *ad referendum*, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que incluía, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’.” (DJ 4.2.2005) 11. Verifico, pois, em sede de liminar, que conforme apontado na petição inicial da Ação Civil Pública n. 0309-2007-221-18-00-3, o Reclamante teria firmado contratos temporários e de “credenciamento por prazo determinado” (fl. 37). 12. O Reclamante sustenta que a proibição de novas contratações determinada pela autoridade Reclamada, aliada ao encerramento dos contratos ora vigentes, que ocorreria em 31.12.2007, e ao agendamento de audiência a realizar-se no dia 29 de março de 2007, às 11 horas e 10 minutos, torna evidente o perigo da demora na prestação jurisdicional requerida na presente Reclamação, uma vez que pode provocar “**VERDADEIRO CAOS NA SAÚDE PÚBLICA LOCAL, COM IRREPARÁVEL PREJUÍZO PARA A COLETIVIDADE**” (fl. 24 — grifos no original). 13. Demonstrada a ocorrência daquele risco e considerando estar presente a plausibilidade jurídica, também comprovada pelo Reclamante, tem-se como necessária a suspensão da tramitação do processo mencionado na Reclamação, a fim de se evitar a continuidade da ação civil pública perante juízo que pode, efetivamente, não titularizar competência para a decisão da causa, como se pode ter dado em relação à Vara do Trabalho da Cidade de Goiás-GO. 14. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão da Ação Civil Pública n. 0309-2007-221-18-00-6, até decisão final da presente Reclamação. 15. Comunique-se, com urgência, o quanto decidido, inclusive por fax. 16. Solicitem-se informa-

ções ao Juízo do Trabalho da Cidade de Goiás-GO (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 14, inc. I, da Lei n. 8.038/90). 17. Intimem-se os advogados do Reclamante para que regularizem a petição inicial. 18. Na seqüência, dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/90 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Supremo Tribunal Federal

Rcl n. 4989 MC / GO — GOIÁS

Relatora: Ministra Cármen Lúcia

Data: 21.3.07

DIREITO SANITÁRIO AMBIENTAL. FEDERALISMO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMIANTO/ASBESTOS. COMPETÊNCIA DO MP. RECLAMAÇÃO NÃO PROVIDA. Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra ato do Ministério Público do Estado de Pernambuco, consubstanciado nas Recomendações das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, Curadorias do Consumidor e da Saúde do Estado de Pernambuco ns. 001/2006, 002/2006 e 003/2006, que teriam sugerido aos estabelecimentos distribuidores de produtos que contêm amianto que procedessem conforme a L. est. 12589/04, a qual proíbe a fabricação, o comércio e o uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos com aquela substância. Funda-se a reclamante no desrespeito à autoridade das decisões do STF nas ADIns 2656 e 2396 (Corrêa e Ellen, respectivamente, DJ 1.8.03) quando se declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da L. 10813/01, do Estado de São Paulo, e da L. 2210/01, do Estado de Mato Grosso, que impunham restrições à utilização do amianto no Estado-membro respectivo, tendo-se em vista a invasão da competência legislativa da União e a extrapolação da competência legislativa concorrente, previstas nos arts. 22, VIII, e 24, V, VI, e XII, da Constituição Federal. Informa que a L. est. 12589/04 — fundamento dos atos reclamados — é objeto da ADIn 3356 da qual a requerente é autora, a qual — após o voto do Relator, Ministro Eros Grau, pela procedência do pedido — teve o julgamento suspenso devido ao pedido de vista feito pelo Ministro Joaquim Barbosa (26.10.05): daí a sua legitimidade ativa nesta reclamação. Ressalta que a Lei Federal n. 9055/95, considerando a diferença no nível de contaminação dos tipos de amianto (anfíbios e serpentina), autorizou o uso seguro e controlado do amianto crisotila (serpentina), ao passo que a L. est. 12589/04 não teria feito essa diferenciação, proibindo a utilização de amianto ou asbesto em qualquer atividade. Sustenta, então, tratar-se de caso idêntico aos apreciados nas decisões paradigmas (ADIns 2396 e 2656), pelo que haveria afronta aos seus motivos determinantes. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia das recomendações reclamadas. Funda o requisito do *periculum in mora* nos “evidentes e irreversíveis danos se aprofundam a cada dia, com prejuízos

econômicos, financeiros e mercadológicos que, por certo, repercutirão nos contratos de trabalho em curso” (f. 15). Decido. Os atos reclamados de n. 001/2006 e 003/2006 recomendam aos estabelecimentos situados nos municípios por eles abrangidos, bem como às secretarias de saúde correspondentes, que procedam conforme a legislação que proíbe o uso do amianto na construção civil, mormente a L. est. 12589/04. Determinam, então, que tais sugestões sejam encaminhadas aos estabelecimentos e órgãos que especificam. Por sua vez, o ato de n. 002/2006 — de elaboração conjunta de diversas promotorias de justiça — recomenda aos órgãos da Secretaria de Fazenda do Estado que especifica a “adoção de todas as medidas necessárias para coibir a entrada e a comercialização de produtos que contenham amianto/asbesto no Estado de Pernambuco”, além do encaminhamento, às promotorias signatárias do ato reclamado, “de relatório acerca das eventuais sanções aplicadas em decorrência do descumprimento da Lei Estadual n. 12.589/2004”, com o conseqüente encaminhamento da recomendação ao Secretário-Geral do Ministério Público e ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público para fins de publicidade (f. 64). De início, cumpre ressaltar ser despropositada a impugnação da Recomendação n. 003/2006 — que se refere aos Municípios de Afrânio e Dormentes — por não haver outorga, aos advogados signatários da Reclamação, de poder para tanto na procuração de f. 18. Quanto à Recomendação 001/2006 e à Recomendação Conjunta 002/2006, o pretenso descumprimento das decisões paradigmas residiria nas medidas que o Ministério Público do Estado de Pernambuco entende necessárias para conferir eficácia à L. est. 12589/04. Percebe-se, assim, que — ainda quando se considere cabível a reclamação na hipótese de desrespeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal declaratória de inconstitucionalidade de texto normativo diverso do dispositivo legal aplicado ao caso — os atos reclamados não desrespeitam as decisões paradigmas apontadas, por não possuírem caráter impositivo. Quando não bastasse sua própria denominação para evidenciá-lo, o certo é que nem o dispositivo legal que confere ao Ministério Público a atribuição de emitir recomendações — L. 8.625/93, art. 27, parág. único, IV — pretende emprestar-lhes eficácia mandamental o que, de resto, o sistema constitucional não admitiria: o Ministério Público — é escusado dizê-lo — não tem poder hierárquico administrativo sobre os órgãos ou entidades aos quais se podem dirigir tais recomendações, nem exerce função jurisdicional, que, só ela, legitima o órgão judiciário a exarar ordens de observância compulsória a quem não lhe esteja subordinado por relação hierárquica. As recomendações discutidas têm, assim, o caráter que a denominação legal lhes desvela: o de advertir o destinatário de que a inobservância da conduta recomendada poderá resultar na propositura da ação civil ou penal à qual esteja legitimado o Ministério Público. É nessa ação, eventualmente proposta, que se poderá controverter sobre a validade, o sentido e a eficácia da lei estadual cujo respeito se recomenda. Ora, não determinando, assim, com força imperativa própria,

a conduta que sugere, a recomendação não é decisão judicial ou administrativa que, por si mesma, implique desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal, a qual — se existente e no âmbito de sua eficácia — constituirá, pelo contrário, título de legitimação para a ação ou omissão contrárias à recomendação. A nota de imperatividade que se poderia imputar às recomendações do MP, assim, não decorreram delas mesmas, mas da L. est. 12.589/04, que já é — conforme destaca a própria reclamante — objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi aplicado o procedimento do art. 12 da L. 9.868/99, ante a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, o deferimento do que requerido nesta reclamação significaria a antecipação, mesmo que limitada, dos efeitos da eventual procedência da ADIn 3356, de julgamento ainda pendente de conclusão, sendo, portanto, de resultado indeterminado: mantém-se, então, a presunção de constitucionalidade da lei estadual. Deve-se ressaltar, ainda, que, no plano processual, a reclamação tem amplitude diversa daquela do recurso extraordinário: neste, há a possibilidade da aplicação analógica de decisões do Tribunal, mas a reclamação, ao contrário, limita-se a restaurar a competência do Supremo Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Nesse sentido, *v. g.*, a Rcl 3940-AgR, Pleno, Pertence, DJ 24.3.06. Esse o quadro, não conheço da reclamação quanto à Recomendação n. 003/2006 e nego-lhe seguimento quanto ao restante (art. 21, § 1º, RISTF).

Supremo Tribunal Federal

Rcl 4907 / PE — PERNAMBUCO

Relator: Ministro Sepúlveda Pertence

Data: 23.3.07

MEIOS DE CONTROLE EM DIREITO SANITÁRIO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI N. 1.179/94, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24, XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I. A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme o art. 24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II. Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais. III. Ação direta julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94. Decisão. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente) e o Senhor Ministro Eros Grau. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Vice-Presidente). Plenário, 16.5.2007.

Supremo Tribunal Federal

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

ADI n. 1278 / SC — Santa Catarina

Relator: Ministro Ricardo Lewandowski

Data: 16.5.07

MEIOS DE CONTROLE EM DIREITO SANITÁRIO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO NO ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PRECEDENTES. 1. O STJ firmou entendimento de que o Conselho Regional de Farmácia é o órgão competente para fiscalização das farmácias e drogarias quanto à verificação de possuírem, durante todo o período de funcionamento dos estabelecimentos, profissional legalmente habilitado, sob pena de incorrerem em infração passível de multa, de acordo com o art. 24 da Lei n. 3.820/60 c/c. o art. 15 da Lei n. 5.991/73. 2. A competência dos órgãos de vigilância sanitária para licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento das drogarias e farmácias, bem como o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, não se confunde com a incumbência do Conselho de Farmácia da região de empreender fiscalização com o intuito de verificar se tais estabelecimentos estão obedecendo à exigência legal de possuírem, durante todo o tempo de funcionamento, profissional legalmente habilitado. 3. Agravo regimental improvido.

Superior Tribunal de Justiça

Órgão Julgador: Segunda Turma

Processo n.: AgRg no Agn. 813.122/SP

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Data da decisão: 15.2.2007

DIREITO PÚBLICO SANITÁRIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ÓRGÃOS LOCAIS, E NÃO DA UNIÃO. 1. Segundo a Constituição, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). Todavia, cumpre ao legislador dispor sobre a “regulamentação, fiscalização e controle” das ações e serviços de saúde, “devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado” (CF, art. 197). Relativamente ao sistema único de saúde (SUS), ele é formado, segundo a Constituição, por “uma rede regionalizada e hierarquizada” de ações e serviços de saúde, observadas, entre outras diretrizes, a da “descentralização, com direção única em

cada esfera de governo” (art. 198). 2. Atendendo ao preceito constitucional, a Lei n. 8.080/90 tratou da organização do SUS, inclusive no que se refere à distribuição das competências, das atribuições e das responsabilidades de seus vários órgãos integrantes, com o objetivo, não apenas de evitar a sobreposição de estruturas administrativas, mas para conferir eficiência, economicidade e agilidade ao sistema, condição indispensável a garantir aos cidadãos, da melhor maneira possível, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3. Relativamente à execução e prestação direta dos serviços, a Lei atribuiu aos Municípios essa responsabilidade (art. 18, incisos I, IV e V, da Lei n. 8.080/90), compatibilizando o Sistema, no particular, com o estabelecido pela Constituição no seu art. 30, VII: “Compete aos Municípios (...) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população”. No que se refere especificamente à assistência farmacêutica, cumpre à União, como gestora federal do SUS, o repasse de recursos financeiros, cabendo aos Municípios e, supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. 4. Recurso especial provido para excluir a União do pólo passivo da demanda, divergindo do relator. Acórdão. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e Luiz Fux, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki. Votaram com o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (voto-vista) os Srs. Ministros Francisco Falcão e Denise Arruda.

Superior Tribunal de Justiça

Órgão Julgador: Primeira Turma

Processo n.: REsp n. 873196 / RS ; Recurso Especial n. 2006/0166974-9

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki

Data: 24.5.07

DIREITO PÚBLICO SANITÁRIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE REAJUSTE. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. I — O Tribunal *a quo* ao apreciar a demanda manifestou-se sobre todas as questões pertinentes à *litis contestatio*, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento. Improcede, pois, a apontada afronta ao art. 535 do CPC. II — Ausente o prequestionamento do conteúdo inserto nos arts. 56, § 1º, da Lei n. 8.666/93, e 2º da LICC, inviável o exame do recurso extremo neste ponto. Incidência do Verbete Sumular n. 282 do STF. III — O art. 26 da Lei n. 8.080/90 estabelece que “Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos

pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS)...”, ou seja, pelo Ministério da Saúde. IV — Assim, escoreito o entendimento exarado no acórdão recorrido no sentido de que inaplicável a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n. 175/95 no que estabeleceu o reajuste das tabelas de serviços do SUS em 15% a partir de 01.01.1996, visto que emanada de órgão incompetente para intervir nas questões atinentes aos recursos orçamentários e financeiros relativos ao SUS. Precedente: REsp n. 849.992/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 19.10.2006. V — Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Acórdão. Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Denise Arruda e José Delgado votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Luiz Fux.

Superior Tribunal de Justiça

Órgão Julgador: Primeira Turma

Processo n.: REsp n. 926756 / PR ; Recurso Especial n. 2007/0034527-1

Relator: Ministro Francisco Falcão

Data: 31.5.07

MEIOS DE CONTROLE EM DIREITO SANITÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LEGITIMATIO AD CAUSAM DO PARQUET. ART. 127 DA CF/88. DIREITO À SAÚDE. 1. O Ministério Público está legitimado a defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. 2. É que a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle dos atos da Administração, com a eleição dos valores imateriais do art. 37, da CF/1988 como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, criou um microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se a Ação Cautelar Inominada, Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas. 3. Deveras, é mister concluir que a nova ordem constitucional erigiu um autêntico ‘concurso de ações’ entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, *a fortiori*, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4. *Legitimatío ad causam* do Ministério Público à luz da dicção final do disposto no art. 127 da CF/1988, que o habilita a demandar em prol de interesses indisponíveis. 5. Sob esse enfoque a Carta Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras atribuições previs-

tas em lei, desde que compatível com sua finalidade institucional (CF/1988, arts. 127 e 129). 6. *In casu*, trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando que o Município custeie avaliação de tratamento médico especializado a pessoa portadora de varizes nos membros inferiores com insuficiência venosa bilateral, e recurso especial interposto contra acórdão que decidiu pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para pleitear direito de outrem que não idoso, criança ou adolescente. 7. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal é direito indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 8. Outrossim, o art. 6º do CPC configura a legalidade da legitimação extraordinária cognominada por Chiovenda como “substituição processual”. 9. Impõe-se, ressaltar que a jurisprudência hodierna do E. STJ admite ação individual acerca de direito indisponível capitaneada pelo MP (Precedentes: REsp 688052/RS, DJ 17.08.2006; REsp 822712/RS, DJ 17.04.2006; REsp 819010 / SP, DJ 02.05.2006). 10. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Denise Arruda, José Delgado e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Superior Tribunal de Justiça

Órgão Julgador: Primeira Turma

Processo n.: REsp 817710/RS; Recurso Especial n. 2006/0027536-2

Relator: Ministro Luiz Fux

Data: 31.5.07

DIREITO PÚBLICO SANITÁRIO. SAÚDE DO ÍNDIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS. DIREITO À SAÚDE. EFICÁCIA IMEDIATA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Fundando-se o Acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional. Precedentes jurisprudenciais do STJ: REsp 804595/SC, DJ de 14.12.2006 e Ag 794505/SP, DJ de 01.02.2007 2. A questão debatida nos autos — implementação do Modelo de Assistência à Saúde do Índio e à

instalação material dos serviços de saúde à população indígena situada em área no Rio Grande do Sul — foi solucionada pelo Tribunal *a quo* à luz de preceitos constitucionais, conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido, *verbis*: “(...) O direito fundamental à saúde, embora encontrando amparo nas posições jurídico-constitucionais que tratam do direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção da integridade física (corporal e psicológica), recebeu no texto constitucional prescrição autônoma nos arts. 6º e 196. (...) Mesmo que situado, como comando expresso, fora do catálogo do art. 5º da CF/88, importante destacar que o direito à saúde ostenta o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do art. 5º, § 2º, da CF/88, seja pelo seu conteúdo material, que o insere no sistema axiológico fundamental — valores básicos — de todo o ordenamento jurídico. Ingo Wolfgang Sarlet, ao debruçar-se sobre os direitos fundamentais prestacionais, bem posiciona o tema: Preliminarmente, em que pese o fato de que os direitos a saúde, assistência social e previdência — para além de sua previsão no art. 6º da CF — se encontram positivados nos arts. 196 e ss. da nossa Lei Fundamental, integrando de tal sorte, também o título da ordem social, e não apenas o catálogo dos direitos fundamentais, entendemos não ser sustentável a tese de que os dispositivos não integrantes do catálogo carecem necessariamente de fundamentalidade. Com efeito, já se viu, oportunamente, que por força do disposto no art. 5º, § 2º, da CF, diversas posições jurídicas previstas em outras partes da Constituição, por equiparadas em conteúdo e importância aos direitos fundamentais (inclusive sociais), adquirem também a condição de direitos fundamentais no sentido formal e material, ressaltando, todavia, que nem todas as normas de ordem social compartilham a fundamentalidade material (e, neste caso, também a formal), inerente aos direitos fundamentais. Além disso, percebe-se, desde já, que as normas relativas aos direitos sociais do art. 6º da CF exercem a função precípua de explicitar os conteúdos daqueles. No caso dos direitos à saúde, previdência e assistência social, tal condição deflui inequivocamente do disposto no art. 6º da CF: ‘São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Além disso, poderia referir-se mais uma vez à íntima vinculação entre os direitos a saúde, previdência e assistência social e os direitos à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, renunciando, neste particular, a outras considerações a respeito deste aspecto (in *A eficácia dos direitos fundamentais*, 3ª ed., Livraria do Advogado, 2003, Porto Alegre, p. 301/302). Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, são dotados de eficácia imediata. A Lei Maior, no que diz com os direitos fundamentais, deixa de ser mero repositório de promessas, carta de intenções ou recomendações; houve a conferência de direitos subjetivos ao cidadão e à coletividade, que se vêem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, a realização em concreto da prescrição constitucional. O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos direitos fundamentais

está encartado no 1º, do art. 5º, da CF/88: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Muito se polemizou, e ainda se debate, sem que se tenha ocorrida a pacificação de posições acerca do significado e alcance exato da indigitada norma constitucional. Porém, crescente e significativa é a moderna idéia de que os direitos fundamentais, inclusive aqueles prestacionais, têm eficácia *tout court*, cabendo, apenas, delimitar-se em que extensão. Superou-se, assim, entendimento que os enquadrava como regras de conteúdo programático a serem concretizadas mediante intervenção legislativa ordinária. Desapegou-se, assim, da negativa de obrigação estatal a ser cumprida com espeque nos direitos fundamentais, o que tinha como conseqüência a impossibilidade de categorizá-los como direitos subjetivos, até mesmo quando em pauta a omissão do Estado no fornecimento do mínimo existencial. Consoante os novos rumos interpretativos, a par de dar-se eficácia imediata aos direitos fundamentais, atribuiu-se ao intérprete a missão de desvendar o grau dessa aplicabilidade, porquanto mesmo que se pretenda dar máxima elasticidade à premissa, nem sempre se estará infenso a uma *interpositio legislatoris*, o que não ocorre, vale afirmar, na porção do direito que trata do mínimo existencial.(...) Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que “a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais).” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional, 5ª ed., Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, p. 1208). Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na idéia de que o preceito constitucional constitui *lex imperfecta*, reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito. A escassez de recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência de concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação do conceito da “reserva do possível”. Porém, tal escudo não imuniza o administrador de adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas que, embora também inseridas na zona de ação pública, são

menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores básicos da sociedade, representados pelos direitos fundamentais. O Ministro Celso de Mello discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: “Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à ‘reserva do possível’ (HOLMES, Stephen/SUNSTEIN, Cass R., ‘The Cost of Rights’, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais — além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização — depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese — mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa — criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ — ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...) 3. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo *decisum* revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado no DJ de 9.5.2005. 4. In casu, o Tribunal de origem pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos embargos de declaração — nulidade do processo decorrente da ausência de intimação da Advocacia Geral da União, para oferecer impugnação aos embargos infringentes, consoante disposto nos arts. 35 e 36 da LC 73/93 e art. 6º da Lei n. 9.028/95, consoante se infere do voto-condutor exarado às fls. 537/542. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente

do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Denise Arruda, José Delgado e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Superior Tribunal de Justiça

Órgão Julgador: Primeira Turma

Processo n.: REsp n. 811608 / RS ; Recurso Especial n. 2006/0012352-8

Relator: Ministro Luiz Fux

Data: 4.6.07

DIREITO SANITÁRIO AMBIENTAL. DANO A TERCEIROS. MENOR COM CRISES REPETITIVAS DE ASMA E RINITE ALÉRGICA OCASIONADAS PELA ATIVIDADE DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O STJ tem entendido que, mesmo tendo o autor apresentado pedido certo, se o juiz não puder chegar, pelas provas dos autos, a um valor correto e seguro a ser deferido, pode e deve remeter a apuração de tal questão à liquidação de sentença, inclusive por aplicação do princípio do livre convencimento, não havendo que se falar em nulidade por sentença *extra petita*. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) adotou a sistemática da responsabilidade civil objetiva (art.14, § 1º) e foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que uma vez comprovada a ocorrência do resultado danoso ao ambiente e a terceiros, bem como o nexo causal entre a lesão infligida e a ação ou omissão do responsável pelo dano, impõe-se o dever de indenizar. Deve-se ter sempre em mente, que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. **Súmula: rejeitadas preliminares. Deram parcial provimento a ambas apelações.**

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Processo n.: 1.0702.01.039069-9/001 (1)

Relator: Eduardo Marine da Cunha

Data: 16.2.06

DIREITO CIVIL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFUSÃO DE SANGUE. CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV. NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL. INOCORRE CERCEAMENTO DE DEFESA SE FOI OPORTUNIZADA ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE ENTENDESSEM NECESSÁRIAS. SE A SENTENÇA É *ULTRA PETITA*, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE SUA NULIDADE, MAS APENAS DE SUA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. O HOSPITAL QUE REALIZA TRANSFUSÃO DE SANGUE DEVE

MANTER EM SEUS REGISTROS OS DADOS COMPLETOS DOS DOADORES, BEM COMO OS RESULTADOS DOS EXAMES, ATESTANDO A SEGURANÇA CONTRA CONTAMINAÇÕES. A NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL QUE ACABA POR RESULTAR NO CONTÁGIO DO PACIENTE COM O VÍRUS HIV É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Processo n.: 2.0000.00.407338-5/000(1)

Relator: Alvimar de Avila

Data: 3.4.04

DIREITO CIVIL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. LESÃO GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO. Fratura exposta com severa perda de substância em perna direita. Infecção por clostrídios toxigênicos. Combate efetivo, com sucessivas higienizações para descontaminação, o que salvou a vida da paciente, não podendo infelizmente preservar-lhe o membro. Gangrena gasosa: fascite necrosante. Alegação de erro na utilização de equipamento gessado para imobilização. Literatura médica que indica, a falta de outro, o referido método, não sendo o mesmo causa eficiente para o agravamento do estado da paciente. Reiteradas perícias, inclusive neste grau de jurisdição que afastam o nexos causal. Inocorrência do dever de indenizar. Desprovimento do recurso.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Processo n.: 2004.001.22301 — Apelação Cível

Relator: Leila Mariano

Data: 10.10.06

DIREITO CIVIL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MUNICÍPIO. CIRURGIA. SONDA. ERRO NA UTILIZAÇÃO. LESÕES DEFINITIVAS. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL EXISTÊNCIA. Ação de Indenização objetivando o Autor ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos por ter sido vítima de erro médico durante um ato cirúrgico em uma unidade da Ré, vindo a lhe causar lesão irreversível. Responsabilidade objetiva imposta pelo § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Utilização pós-cirúrgica da Sonda de Foley, que causou a lesão definitiva do Autor. Nexos causal demonstrado pelo erro na utilização da sonda. Existência do dano moral. Verba fixada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não faz jus o Apelante à pensão mensal, pois o mesmo já se encontra aposentado. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Órgão julgador: 7ª Câmara Cível

Processo n.: 2006.001.28437 — Apelação Cível

Relator: Caetano Fonseca da Costa

Data: 10.10.06

DIREITO CIVIL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA ADEQUADA À ÉPOCA DA DESCOBERTA DA DOENÇA. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURADA CONDOTA IMPERITA E/OU NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO AFASTADA. PLEITO INDENIZATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos de indenização por ato ilícito advindo de erro médico, a responsabilidade civil do profissional é subjetiva. A culpa surge da inobservância dos cuidados necessários no decorrer da conduta do médico, a teor do prescrito no art. 1.545 do Código Civil de 1916. Ante à presença de células cancerígenas evidenciadas no diagnóstico, não há que se cogitar da culpa do profissional que, utilizando-se dos meios recomendáveis e adequados à época do ocorrido, realiza cirurgia de mastectomia na paciente, a fim de obstar a evolução da doença.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Órgão julgador: Terceira Câmara de Direito Civil

Processo n.: 2005.011307-2

Relator: Wilson Augusto do Nascimento.

Data: 30.5.05